

CUBA

Informe por países sobre procedimientos relativos a los Derechos Humanos – 2007

Expedido por el Buró para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo

11 de marzo de 2008

Cuba, con una población de aproximadamente 11 millones de habitantes, es un estado totalitario dirigido formalmente por un Presidente en funciones, el General de Ejército Raúl Castro. En las elecciones de 2003 a la Asamblea Nacional, las cuales no fueron ni libres ni justas, el Partido Comunista (PC) obtuvo el 98% de los votos y la totalidad de los 609 escaños de dicha Asamblea. El gobierno ejerce el control a través del PC y las organizaciones de masas afiliadas a él, la burocracia y el aparato de la Seguridad del Estado. El general Castro obtuvo el control provisional de manos de su hermano Fidel Castro, en una proclama emitida en julio de 2006, a raíz de un tratamiento médico que este último tuviera que seguir. Fidel Castro continuó dominando la política en una amplia gama de aspectos. El Ministerio del Interior ejerce el control sobre la policía, los cuerpos de seguridad interna y el sistema de establecimientos penitenciarios.

El gobierno continúa negando a sus ciudadanos sus derechos humanos básicos y ha cometido numerosos y serios abusos. El gobierno negó a sus ciudadanos el derecho a cambiar el sistema de gobierno. Para finales de año, había al menos 240 detenidos y prisioneros políticos. Casi un total de 5, 000 ciudadanos cumplieron sentencias por “peligrosidad”, sin que se les culpara de otra conducta criminal específica. Se reportaron los siguientes problemas relacionados con los derechos humanos: asesinatos ilegales; asesinatos, golpizas y abusos contra detenidos y prisioneros, incluyendo activistas de derechos humanos, cometidos con total impunidad; condiciones penitenciarias crueles y con peligro para la vida, las cuales incluyeron la denegación de atención médica; acoso, golpizas y amenazas contra los opositores políticos por turbas reclutadas por el gobierno, la policía y oficiales de la Seguridad del Estado; arresto arbitrario y detención de defensores de los derechos humanos, así como de miembros de organizaciones profesionales independientes; negación de un juicio justo e interferencia en la privacidad, incluyendo el monitoreo generalizado de las comunicaciones privadas. También se observaron severas limitaciones impuestas a la libertad de expresión y de prensa; negación del derecho de reunión y asociación pacíficas; restricciones a la libertad de movimiento, incluyendo la negación selectiva del permiso de salida a los ciudadanos y el reenvío forzoso de personas desde la capital hacia sus pueblos de residencia; y el no reconocimiento de los grupos locales defensores de los derechos humanos ni el otorgamiento de permiso para funcionar legalmente. Otros problemas registrados fueron: violencia doméstica, prostitución de menores, turismo sexual, discriminación hacia las personas de ascendencia africana y severas restricciones a los derechos laborales, incluyendo el derecho a crear sindicatos independientes.

RESPECTO HACIA LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Respeto hacia la integridad de la persona, incluida la libertad de no enfrentar:

a. Arbitraria e ilegal privación de la vida

No se tuvo noticias de que el gobierno o sus agentes hubiesen cometido algún asesinato por motivos políticos.

El 20 de marzo, en la ciudad de Matanzas, un oficial de la policía que se encontraba fuera de servicio disparó y dio muerte al ciudadano de 34 años Rangel Enrique Pons, quien se encontraba desarmado. Supuestamente, el oficial le había pedido su motocicleta a cambio de ocultar información sobre el negocio ilegal de ron propiedad de Pons. Al éste negarse, el agente le disparó en la cabeza.

El 29 de julio, el director de la prisión Kilo 8, en la provincia de Camagüey, ordenó a los guardias sofocar un altercado entre presos. Utilizando palos y tubos de metal, los guardias los golpearon con tal fuerza que llegaron a matar a dos de ellos: Carlos Rafael Labrada y Amauri Medina, e hirieron gravemente a otro preso. Según declaraciones de testigos, los guardias continuaron golpeándolos aún cuando éstos se encontraban inconscientes.

b. Desaparición

No se reportaron desapariciones por motivos políticos.

c. Torturas u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

La ley prohíbe el tratamiento abusivo hacia los detenidos y prisioneros; sin embargo, en ocasiones miembros de las fuerzas de seguridad propinaron golpizas y de otras formas abusaron con impunidad contra detenidos, prisioneros y defensores de los derechos humanos y la democracia.

Aunque los casos de tortura física fueron raros, las autoridades golpearon, acosaron y amenazaron de muerte a disidentes dentro y fuera de la prisión. Muchos fueron interrogados y presionados para que firmaran declaraciones que los incriminaban, o para que colaboraran con las autoridades. Algunos detenidos y prisioneros fueron víctimas de abusos físicos, a veces cometidos por otros presos con la aquiescencia de los guardias; o fueron sometidos a largos períodos de aislamiento o a encierro en celdas de castigo. Los prisioneros políticos y detenidos que se negaron a vestir el uniforme de preso o a tomar parte en actividades de “reeducación” fueron objeto de maltrato.

El periodista independiente Armando Betancourt Reina, excarcelado el 20 de agosto después de cumplir una sentencia de 15 meses en la prisión Cerámica Roja, dijo que, a diferencia de años anteriores, los guardias evitaron abusar de los prisioneros políticos en presencia de testigos. Prisioneros que fueron golpeados relataron que habían sido sometidos a aislamiento y devueltos a la población penal general después de 15 ó 20 días, período durante el cual los golpes y otras lesiones ya habían sanado. Familiares de prisioneros dijeron creer que miembros del personal de la prisión incitaban a los reos con promesas de recompensas para que golpearan a los prisioneros políticos, aunque supuestamente esta práctica fue menos

común que en años anteriores. El 7 de septiembre, la madre del prisionero político José Luís Díaz Paneque declaró que, en confabulación con el personal, otro preso en la prisión de Las Mangas, provincia Granma, golpeó a su hijo por lo que éste recibió cuatro puntos de sutura. El mismo 7 de septiembre, el periodista independiente Adolfo Fernández, encarcelado en la prisión de Canaleta, provincia Ciego de Avila, presencié cómo los guardias militares golpearon con puños, botas y porras al preso común Many Adan Pérez, luego que éste se resistiera a ser transferido a otro establecimiento penitenciario. Ese mismo día, Fernández vio a dos guardias golpear al prisionero porque éste trató de guardar su comida en un recipiente, cuando las reglas especifican que la comida debe ser ingerida en el comedor.

El gobierno continuó sometiendo a “actos de repudio” a las personas que no estaban de acuerdo con él, aunque estos incidentes, especialmente aquellos frente a los hogares de disidentes, fueron notablemente inferiores en número e intensidad respecto a años anteriores. El gobierno dirigió a militantes del PC y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC); a miembros de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), de la Asociación de Combatientes de la Revolución, y a otros grupos e individuos, para que montaran protestas públicas contra los disidentes, usualmente frente a los hogares de éstos. Los participantes gritaron insultos y obscenidades. En ocasiones, las turbas dañaron la casa o propiedad de la víctima, a veces asaltándola a ésta o a sus familiares. El 2 de marzo, una turba agredió en la ciudad de Santa Clara al periodista independiente Guillermo Fariñas. El 23 de agosto, una muchedumbre rodeó a José Armando Torres en su centro de trabajo en Bayamo, provincia Granma, y lo insultó frente a sus compañeros. Dirigentes de la disidencia, como Martha Beatriz Roque, continuaron recibiendo amenazas de muerte. Aunque el gobierno declaró que los actos de repudio habían sido espontáneos, agentes encubiertos de la policía y la Seguridad del Estado estuvieron a menudo presentes y evidentemente dirigieron estas actividades, como por ejemplo amenazando a los vecinos con la pérdida de sus trabajos si no participaban. El gobierno no detuvo a ninguna de las personas que participaron en los actos de repudio, ni siquiera a quienes atacaron físicamente a la víctima. La policía tampoco respondió a las quejas de las víctimas.

La policía atacó a los disidentes en confrontaciones individuales y lo hizo con impunidad. El 15 de septiembre, tres oficiales de la policía sacaron de su casa al disidente y bibliotecario independiente José Díaz Silva y lo llevaron a una unidad de policía, donde otros siete agentes lo golpearon en la frente y el torso, a la vez que trataron de estrangularlo. Díaz, quien sufrió heridas múltiples, fue puesto en libertad sin cargos. Cuando trató de entablar una denuncia, el oficial de guardia desestimó el incidente por considerarlo “una reyerta personal”.

Condiciones de las prisiones y centros de detención

Las condiciones de las prisiones continuaron siendo crueles y peligrosas para la vida. Las condiciones de aproximadamente 200 centros de detención y cárceles fueron aún peores, con celdas continuamente infestadas de alimañas y carentes de agua, servicios sanitarios, y adecuada ventilación e iluminación. Muchos prisioneros como Francisco Chaviano, excarcelado en el mes de agosto luego de cumplir una condena de 13 años y tres meses, pasaron meses de aislamiento en celdas de castigo estrechas y oscuras. Muchas celdas eran húmedas y les causaron problemas respiratorios. A menudo, las autoridades les negaron tratamiento médico, visitas familiares, adecuada nutrición, exposición a la luz natural, pago por su trabajo y derecho a interponer demanda ante la dirección del penal. El gobierno envió a la mayoría de los reos políticos a prisiones lejos de sus familiares, aumentando el sentido de aislamiento suyo y de sus parientes debido a las dificultades del transporte.

El gobierno aseveró que los guardias de las prisiones utilizaron la fuerza para restablecer el orden sólo cuando fue estrictamente necesario, pero hubo casos de uso innecesario de la fuerza y la brutalidad que provocaron muertes. El 13 de septiembre, el prisionero Angel García Rivero, encarcelado en la prisión Kilo 7 en Camagüey, dijo haber visto al jefe de los guardias de ese bloque de la prisión, tirar contra el piso al retardado mental Reinaldo González Betancourt, provocándole la pérdida del conocimiento. García declaró que posteriormente, González fue conducido a una celda de castigo, donde permaneció durante varias horas desnudo y colgado de ambas manos atada a las barras. El preso Yarlo Chávez Salazar informó que el 23 de septiembre, en la Unidad 1 de la prisión Combinado del Este en La Habana, fue sometido a electro-shocks.

Las condiciones de higiene y salud en las prisiones fueron paupérrimas. Familiares de los encarcelados reportaron la amplia diseminación de serias enfermedades y padecimientos entre los prisioneros políticos, cuyo tratamiento fue a menudo retenido por el personal de la prisión. Se reportó gran número de casos con trastornos digestivos, siendo comunes enfermedades prevenibles como el beri-beri y el dengue. Los brotes de enfermedades de la piel provocadas por la contaminación de las aguas fueron frecuentes. A mediados del mes de septiembre, en la prisión Kilo 8 de Camagüey, se produjo una seria epidemia de enfermedad dermatológica. También hubo casos de envenenamiento por ingestión de alimentos. El 7 de septiembre, 900 presos en la prisión Kilo 7 experimentaron trastornos intestinales severos y urticaria luego de haber ingerido una masa con sabor a carne. El único tratamiento aplicado por el médico de la prisión a los enfermos fue un cocimiento de hojas de guayaba. Prisioneros excarcelados, como Francisco Chaviano y Armando Betancourt Reina, dijeron que, a menudo, los presos se sacaban ellos mismos sus propias piezas dentales ante la negativa de las autoridades de concertarles citas con el dentista. En el mes de julio, el jefe de los servicios médicos de la prisión Kilo 7 reconoció que el 60% de la población penal estaba contagiada con tuberculosis. Los presos declararon que el personal no trató de detener el brote de esa enfermedad y que, de hecho, el director de la prisión expulsó a los presos del dispensario antes de las festividades por el 26 de julio, manteniendo el local cerrado durante varias semanas. El 12 de agosto, falleció el preso Raúl Ferro Rodríguez en la prisión de Quivicán, víctima de un agudo ataque de asma, luego de que los guardias ignoraran sus repetidos pedidos de auxilio. El 10 de septiembre, en la prisión provincial de Sancti Spiritus, falleció Geovany Figueroa Reyes víctima de trastornos cardíacos, a pesar de haber clamado infructuosamente, durante días, por un medicamento para el corazón.

Según declaraciones de grupos de derechos humanos, los suicidios fueron comunes en prisiones y centros de detención, aunque el gobierno no reveló información sobre el tema. Los familiares del disidente Manuel Acosta Larena, quien según la policía se había ahorcado en su celda de la estación de policía de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, solicitaron una investigación por sospechar que algo turbio había pasado. Dichos familiares dijeron que Acosta gozaba de buena salud física y mental, y que en otras ocasiones había sido detenido sin deprimirse significativamente. La policía se negó a investigar el incidente.

El gobierno puso a convivir, en una misma celda, a prisioneros mentalmente sanos con otros mentalmente perturbados.

Algunos presos llegaron a auto mutilarse, a menudo con la intención de ser trasladados a una prisión más cercana de su familia. El periodista independiente Armando Betancourt Reina declaró haber presenciado cómo los presos se hacían tajos grandes en los brazos.

En muchos casos, la comida en las prisiones resultó incomible, con lo cual los alimentos de fuera del penal fueron esenciales para satisfacer las necesidades nutricionales. La dieta típica de los presos consistió en arroz mal cocinado, a menudo lleno de gusanos, y, a veces, maíz tostado o tortas de harina de trigo. Supuestamente, se permitía a los familiares de los prisioneros llevar entre 30 y 40 libras de alimentos en intervalos de 3 ó 4 meses; sin embargo, los familiares informaron que los guardias a menudo impidieron las entregas de alimentos. Fue característico que el agua utilizada para beber, bañarse y descargar el hueco en el suelo de la celda usado como inodoro común, estuviese contaminada con parásitos perfectamente visibles.

El hacinamiento fue común. Armando Betancourt Reina, prisionero político excarcelado, declaró que durante sus 15 meses de confinamiento, compartió una celda de 13 pies de ancho por 16 de largo, con otros 11 presos. Prisioneros de otros establecimientos penitenciarios reportaron niveles de densidad similares.

Se produjeron asaltos sexuales en las prisiones. En la prisión Manto Negro de La Habana, la prisión de mujeres más grande del país, fueron comunes las relaciones homosexuales por la fuerza. En muchos de estos casos, las mujeres más jóvenes fueron el blanco de aquellas que cumplían sentencias más largas. Las que se resistieron enfrentaron mayor violencia potencial incluidas las golpizas o acuchillamientos. A menudo, los guardias se hicieron de la vista gorda y no castigaron a las culpables. El gobierno no emitió información alguna sobre el tratamiento de menores en las cárceles o centros de detención para jóvenes o para adultos.

El material de lectura fue prohibido o restringido estrictamente. Con regularidad, los oficiales de las prisiones negaron a los presos otros derechos, como el derecho a la correspondencia.

En ocasiones, el gobierno negó las visitas pastorales a los detenidos y presos políticos. Sin embargo, los detenidos declararon que, con más frecuencia que en el pasado, las autoridades aceptaron solicitudes por escrito para ver a un sacerdote católico.

El gobierno no permitió el monitoreo independiente de las condiciones existentes en las prisiones por parte de los grupos de derechos humanos, nacionales o internacionales. El gobierno no permitió a las organizaciones humanitarias internacionales el acceso a los detenidos políticos. Desde 1989, el gobierno le ha negado al Comité Internacional de la Cruz Roja las visitas a las prisiones.

d. Arresto o detención arbitrarios

Aunque está prohibido por la ley, el gobierno ha utilizado, efectiva y frecuentemente, el arresto y la detención arbitrarios para acosar a los opositores.

La policía goza de amplios poderes de arresto que pueden ejecutar sin orden de detención alguna. Bajo la ley, la policía puede no sólo detener sin orden de arresto a una persona sorprendida en el acto delictivo, sino también a cualquiera acusado simplemente de cometer un delito contra la seguridad del Estado.

Papel de la policía y del aparato de Seguridad

El Ministerio del Interior ejerce el control sobre la policía, los cuerpos de seguridad interna y el sistema penitenciario. La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) es la principal organización encargada de hacer cumplir la ley y generalmente resultó efectiva en la investigación de delitos comunes. Unidades especializadas de la Dirección de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior tienen la responsabilidad de monitorear, infiltrar y reprimir a los grupos de oposición política. La PNR desempeña un papel de apoyo en los registros de las casas y brindó a los agentes de la Seguridad del Estado locales para interrogatorios.

Los miembros de los cuerpos de seguridad actuaron con impunidad al cometer numerosos y graves abusos contra los derechos humanos. Aunque el código ético de la PNR y las regulaciones del Ministerio del Interior prohíben la brutalidad policial, el gobierno no anunció ninguna investigación sobre conducta policial inapropiada durante el año. La corrupción constituyó un problema.

Militantes del PC y dirigentes de los CDR a nivel de barrio carecen de poderes formales para hacer cumplir la ley, pero gozaron de una considerable autoridad y la utilizaron a menudo para movilizar acciones contra cualquier persona que criticara al gobierno o a sus líderes.

Arresto y detención

La ley exige que la policía presente cargos formales y que, o bien libere al detenido, o radique la causa ante un fiscal dentro de las 96 horas del arresto. También obliga a las autoridades a brindarles acceso a un abogado dentro de los 7 días del arresto. El código penal fija un período máximo de seis meses de permanencia en prisión, antes de que el acusado sea llevado a juicio. En la práctica, no se cumplió la ley. En mayo de 2006, el periodista Armando Betancourt Reina fue arrestado durante un desalojo. Se le mantuvo en aislamiento sin acceso a sus familiares o a un abogado hasta que fue trasladado de prisión en junio de 2006. Las audiencias previas al juicio comenzaron el 8 de febrero. A los testigos de la defensa no se les permitió declarar y el tribunal retuvo el caso para posterior investigación. El 3 de julio, finalmente, las autoridades lo acusaron de promover desorden público.

El pago de fianzas fue posible, aunque típicamente no en los casos involucrando supuestas actividades antigubernamentales. El tiempo de detención antes del juicio contó dentro del tiempo de sentencia a cumplir en los casos de los fallos condenatorios. El gobierno negó a los prisioneros y detenidos el acceso rápido a sus familiares.

La ley dispone que todas las libertades civiles legalmente reconocidas pueden ser negadas a cualquiera que “se oponga activamente a la decisión del pueblo de construir el socialismo”. Los funcionarios gubernamentales invocaron constantemente esta potestad para negar el debido proceso a los detenidos por supuestos cargos relacionados con la seguridad del Estado. Fue frecuente que la policía careciera de orden de arresto al efectuar una detención, o emitiera una en el momento del arresto. La Comisión Cubana para los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional (CCDHRN) informó que frecuentemente la policía llevaba consigo una pila de órdenes de arresto en blanco y con el cuño del tribunal, para llenarlas en el lugar de los hechos. En ocasiones, las autoridades emplearon cargos falsos de delitos comunes para arrestar a opositores políticos, sin a menudo informarles sobre los mismos.

Rutinariamente, las autoridades llevaron a cabo el arresto y detención arbitrarios de defensores de los derechos humanos. En la inmensa mayoría de los casos, los disidentes

fueron retenidos por varias horas y luego puestos en libertad sin cargos en su contra. La CCDHRN contabilizó 146 detenciones de este tipo entre los meses de enero y agosto. El 24 de septiembre, en la ciudad de Santa Clara, la policía puso bajo custodia a 42 participantes en una marcha pacífica, los cuales fueron liberados sin cargos algunas horas después. El 27 de septiembre, la policía detuvo en varias ciudades a 45 disidentes, quienes viajaban para participar en una protesta ante el Ministerio de Justicia. Todos fueron puestos en libertad sin cargos en el transcurso de 24 horas.

El Código Penal incluye el concepto de “peligrosidad potencial”, definida como “la proclividad particular de una persona a cometer delitos, demostrada por su conducta y en manifiesta contradicción con las normas socialistas”. No hacen falta pruebas para condenar a alguien por este tipo de delito. La CCDHRN estimó que entre 3,000 y 5,000 ciudadanos, incluyendo a 1,000 mujeres, fueron encarcelados por este delito. La CCDHRN también apuntó que 8 de los 9 prisioneros políticos encarcelados durante el año fueron condenados por “peligrosidad potencial”.

El disidente Jorge Luis Pérez García (Antúnez) fue confinado en su casa por 24 horas, del 9 al 10 de diciembre, después de haber sido obligado por la fuerza a retornar a Placetas, su pueblo de residencia, por participar en una manifestación en La Habana en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Ramón de Jesús Verdecia Camejo, del Partido “Paz, Amor y Libertad”, fue confinado en su casa de Colón, provincia de Matanzas, del 8 al 10 de diciembre.

e. Denegación de un juicio público justo

Aunque la constitución dispone la existencia de tribunales independientes, los subordina explícitamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y al Consejo de Estado. La ANPP y sus contrapartes a nivel inferior seleccionan a todos los jueces. Por lo tanto, en la práctica, el PC controló todos los tribunales.

Existieron tribunales civiles a nivel municipal, provincial y de apelación. Estos estuvieron presididos por paneles de jueces profesionales y legos. Los tribunales militares, regidos por una legislación especial, asumieron la jurisdicción de ciertos casos “contrarrevolucionarios”. Los tribunales militares procesaron a civiles si un miembro de las fuerzas armadas estuvo involucrado en el delito junto con éstos. En estos tribunales existió el derecho a apelar y a tener acceso a un abogado defensor y el acusado fue instruido de los cargos en su contra.

Procedimientos judiciales

Los tribunales socavaron el derecho a un juicio justo al restringir el derecho a la defensa y a menudo incumplieron el derecho a un debido proceso, los cuales en teoría debían estar a disposición de los acusados. Aunque la mayoría de los juicios fueron ostensiblemente públicos, los que tuvieron que ver con supuestas violaciones de la seguridad del estado fueron celebrados a puertas cerradas. Casi todos los casos fueron juzgados en menos de un día; no hubo juicios con jurados. La ley dispone que el acusado tenga derecho a un abogado y, salvo en los casos que involucren a la seguridad del Estado, el derecho a consultarlo de forma oportuna. Sin embargo, muchos acusados o bien no tuvieron un abogado defensor, o se reunieron con un abogado sólo minutos antes de comenzar su juicio. Además, el control del gobierno sobre los colectivos de abogados comprometió la habilidad de éstos para representar

a sus clientes, especialmente aquellos acusados de cometer delitos contra la seguridad del Estado.

Los criterios para presentar evidencias fueron arbitrarios y discriminatorios. A menudo, la única evidencia aportada, particularmente en los casos políticos, fue la confesión del acusado, obtenida usualmente bajo coerción y sin asistencia legal. El derecho del acusado a presentar testigos fue tenido en cuenta arbitrariamente. Los abogados de la defensa tuvieron acceso a los expedientes policiales y a la acusación por escrito del fiscal sólo en el juicio o minutos antes. Debido a estas limitaciones y a que muchos de estos juicios duran menos de ocho horas, los abogados defensores no tuvieron tiempo de prepararse con testimonios peritales.

En el mes de abril, el abogado disidente Rolando Posada Jiménez fue juzgado en ausencia por una corte secreta, sin la presencia de familiares o de representación legal, al negarse el tribunal a aceptar su solicitud de asumir él mismo su propia defensa. Posada había sido arrestado en el 2003. El tribunal lo condenó a 12 años de privación de libertad por revelar secretos que comprometían la seguridad del estado, cuya naturaleza exacta jamás le fue informada, además de por irrespeto hacia la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Los fiscales pueden presentar el testimonio de un miembro de los CDR sobre los antecedentes revolucionarios del acusado, lo que puede abonar a ser mas larga o corta la sentencia. La ley presupone que los acusados son inocentes hasta tanto no se pruebe su culpabilidad, pero en la práctica las autoridades hicieron caso omiso de dicha presunción. La ley reconoce el derecho de apelación ante los tribunales municipales, pero lo limita en los tribunales provinciales a los casos de largas condenas o de pena capital. Las apelaciones de los casos de pena capital son automáticas. El Consejo de Estado debe confirmar el fallo de la sentencia capital.

Presos y detenidos políticos

La CCDHRN informo que, a finales de año, el gobierno tenía retenidas al menos a 240 personas entre presos y detenidos; 47 de ellos fueron condenados por terrorismo y 30 por peligrosidad. Las condenas fueron por delitos tales como irrespeto hacia el jefe de Estado, irrespeto y ofensa hacia los símbolos patrios, desorden público y tentativa de abandonar ilegalmente el país. Otros reos fueron condenados por distribuir propaganda enemiga, asociación ilícita, imprimir material clandestinamente, o por el delito amplio de rebelión, a veces esgrimido contra los partidarios de un cambio democrático por medios pacíficos. En lo que seria un cambio significativo, las autoridades impusieron detenciones breves y utilizaron los cargos de peligrosidad contra los disidentes políticos, en lugar de los cargos por delitos que conllevaban largas sentencias de prisión y que, con anterioridad, fueron frecuentemente utilizados.

A fines de año, aún permanecían en prisión 59 de los 75 activistas pacíficos, periodistas, dirigentes sindicales y figuras de la oposición arrestados y condenados en el 2003, acusados mayormente de violar la seguridad nacional y ayudar a una potencia extranjera.

El maltrato hacia prisioneros y detenidos políticos fue extensivo. Las golpizas no fueron infrecuentes y a muchos presos políticos les fueron negados privilegios otorgados a los reos comunes, tales como el acceso al patio para realizar ejercicios o tomar el sol. El gobierno siguió negando a las organizaciones de derechos humanos y al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a los presos y detenidos políticos. Las autoridades les negaron las visitas

a los familiares de los presos y detenidos políticos. Los presos confinados en celdas de castigo no tuvieron acceso a abogados.

Procedimientos judiciales civiles y recursos

Existen tribunales para asuntos civiles. La ley dispone que los ciudadanos que aleguen violaciones de los derechos humanos tengan la facultad de entablar una denuncia formal ante la fiscalía. Sin embargo, la CCDHRN apuntó que el control ejercido por el PC sobre las cortes hizo que los ciudadanos desistieran de recurrir a los tribunales civiles. La CCDHRN no tuvo conocimiento de ninguna demanda relacionada con los derechos humanos que haya tenido resultados favorables durante el año, así como de ninguna indemnización por perjuicios ordenada por un tribunal vinculada a un caso de derechos humanos.

f. Interferencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

Aunque la constitución dispone la inviolabilidad del hogar y la correspondencia del ciudadano, fue constante la vigilancia oficial sobre los asuntos privados y familiares por parte de organizaciones controladas por el gobierno, como los CDR. El gobierno empleó la vigilancia física y electrónica contra los opositores políticos no-violentos e interfirió en la vida de los ciudadanos. Las autoridades utilizaron una amplia gama de controles sociales para descubrir y desalentar la inconformidad.

Rutinariamente, la Seguridad del Estado leyó la correspondencia proveniente del extranjero. La mayoría de las cartas del exterior fueron entregadas con el sobre obviamente dañado y vuelto a sellar; muchas fueron puestas en sobres que no eran los originales. La Seguridad del Estado monitoreó las llamadas telefónicas locales e internacionales, la correspondencia y las conversaciones con extranjeros. La CCDHRN calculó en 30,000 las líneas telefónicas permanentemente intervenidas por el gobierno. Durante el año, agentes de la Seguridad del Estado sometieron a periodistas y diplomáticos extranjeros a acoso y vigilancia, incluyendo la vigilancia electrónica y la penetración subrepticia en sus hogares. En el mes de septiembre, el congresista uruguayo Gustavo Espinosa presentó una denuncia oficial alegando que sus conversaciones telefónicas con los disidentes estaban siendo interferidas.

Hubo numerosos informes dignos de crédito sobre el desalojo forzoso de ocupantes ilegales de viviendas y de residentes desprovistos de permiso para residir en La Habana u otras ciudades de importancia.

El Ministerio del Interior empleó un sistema de informantes y a los CDR a nivel de cuadra para monitorear y controlar la opinión pública. Los CDR continuaron informando sobre las actividades sospechosas, incluyendo el consumo ostentoso; las reuniones no autorizadas, incluyendo aquellas con extranjeros; y todo lo que consideraron actitudes desafiantes hacia el gobierno o la revolución.

En algunos casos, el gobierno presionó a los individuos para que integraran las filas del PC o de los CDR. Los aspirantes a puestos de trabajo de una agencia suministradora de personal, a la hotelería, tuvieron que presentar documentos que atestiguaran su militancia en el PC o su membresía en los CDR u otras organizaciones para ser elegibles. En el mes de septiembre, un activista de derechos humanos fue arrestado, retenido durante varias horas y finalmente sancionado con una multa de \$25 (600 pesos) por negarse a encender la luz del portal de su casa durante una fiesta de los CDR celebrada en su calle.

Funcionarios gubernamentales tomaron represalias contra las esposas e hijos de disidentes. El 2 de febrero, en Buenaventura, provincia de Holguín, la policía detuvo a Leyanis Domínguez, la hija de 13 años de edad del Reverendo Delmides Hidalgo, y la interrogaron durante una hora para que revelara las actividades de su padre; dos meses después, la policía la condujo a la unidad para interrogarla por segunda vez. El 17 de marzo, en Corralillo, provincia de Villa Clara, la policía amenazó a Silvia Aguado, esposa de un preso político, con la pérdida de la custodia de su hijo. El 18 de julio, Yoselín Bécquer González fue expulsada de su trabajo por ser esposa de un disidente.

Sección 2. Respeto hacia las libertades civiles, incluyendo:

a. Libertad de expresión y de prensa

La constitución dispone la libertad de expresión y de prensa si “se ajusta a los objetivos de la sociedad socialista”, una cláusula que en efecto impide la libertad de expresión, y en la práctica, el gobierno no permitió la crítica hacia la revolución o sus líderes. Las leyes contra la propaganda antigubernamental, los graffiti y el irrespeto hacia los funcionarios establecen sanciones de tres meses a un año de prisión; la crítica hacia el presidente, los diputados a la ANPP o los miembros del Consejo de Estado está penada con tres años de prisión. La distribución de “propaganda enemiga”, incluyendo cualquier opinión contraria a la del gobierno, puede ser castigada hasta con 14 años de prisión. El gobierno consideró a los informes internacionales sobre violaciones de los derechos humanos, así como a principales periódicos y revistas extranjeros como propaganda enemiga. Los CDR locales inhibieron la libertad de expresión al monitorear e informar el desacuerdo o la crítica.

Los ciudadanos que hablaron con periodistas independientes estuvieron expuestos a la represalia gubernamental. El 14 de marzo, en la ciudad de Ciego de Ávila, el ministro evangélico Luís Enrique Cervantes perdió su trabajo por hablar con un periodista independiente. Sacerdotes católicos y otros miembros del clero pudieron efectuar sermones sin previa aprobación del gobierno. Se permitió a funcionarios de la Iglesia Católica hacer intervenciones radiales de 15 minutos de duración en ocasiones especiales como la Navidad, siempre y cuando éstas no tuvieran ningún contenido político.

El gobierno consideró a la prensa escrita y electrónica como propiedad del Estado. El gobierno fue propietario de, y el PC controló, todos los medios de difusión, excepto un número de boletines clandestinos. El gobierno operó cuatro estaciones nacionales de televisión, seis estaciones nacionales de radio y una internacional, una revista nacional y tres periódicos nacionales. También operó muchas estaciones locales de radio y de televisión, revistas y periódicos. Todos fueron órganos oficiales del PC. La conformidad fue casi uniforme en todos estos medios; ninguno gozó de independencia editorial. A excepción de unas pocas publicaciones católicas, el régimen procesó judicialmente con severidad a cualquiera que intentase distribuir material escrito, filmado o fotografiado. La ley prohíbe “la impresión clandestina”. El gobierno fue el único editor de libros en el país; a excepción de algunas publicaciones de la Iglesia Católica, los censores estatales dispusieron la aprobación previa a la publicación.

El gobierno sometió a los periodistas independientes a restricciones de viaje, detenciones, acoso a sus familiares y amigos, confiscación de equipos, encarcelamiento y amenazas de encarcelamiento. Agentes de la Seguridad del Estado se hicieron pasar por periodistas

independientes para recoger información sobre activistas y diseminar desinformación y desconfianza en los círculos de prensa independientes. Un total de 24 periodistas permanecieron encarcelados durante el año. El 17 de abril, un tribunal de la provincia de Matanzas condenó al periodista independiente Oscar Sánchez Madan a 4 años de prisión por peligrosidad potencial. Sánchez había escrito artículos tratando de documentar el volumen actual de la zafra azucarera, el cual era inferior al reportado por el gobierno. Las autoridades impusieron una multa de \$250 (6,000 pesos) al periodista independiente Alvaro Yero Felipe por peligrosidad potencial. El gobierno continuó acosando a algunos periodistas aún después de ponerlos en libertad. En el mes de agosto, el periodista Albert Santiago Dubouchet, liberado en el 2005 después de sufrir condena por la publicación de un artículo, fue sentenciado a 6 años de cárcel por supuesto robo de un pañuelo firmado por Fidel Castro. Reporteros sin Fronteras calificó la acusación de “grotesca y vergonzosa”. En el mes de septiembre, la policía advirtió al recién liberado periodista Armando Betancourt Reina, que le cortarían el servicio telefónico si lo usaba para “actividades contrarrevolucionarias”.

Las publicaciones de la Iglesia Católica fueron objeto de presión gubernamental. En el mes de abril, Dagoberto Valdés Hernández, redactor de la revista *Vitral*, una publicación de la diócesis de Pinar del Río que ganó fama por sus opiniones independientes, anunció que suspendía la publicación por falta de papel y tinta. El consejo de redacción de la revista también perdió en ese momento su acceso a la Internet. El nuevo obispo de la diócesis de Pinar del Río contradijo que *Vitral* hubiese sido obligada a cerrar, sin embargo reconoció que sin los suministros necesarios, la revista no se podía seguir publicando. En el mes de junio, *Vitral* reanudó su publicación bajo una nueva dirección editorial y con un contenido menos osado.

En el mes de febrero, el gobierno ordenó abandonar el país a César González-Calero, del diario *El Universal* de Ciudad México, y a Gary Marx, del *Chicago Tribune*. Marx declaró que las autoridades tildaron sus artículos de “demasiado negativos”. También en el mes de febrero, el gobierno denegó la visa al reportero de la BBC Stephen Gibbs.

La ley prohíbe la distribución de material impreso proveniente de fuentes extranjeras. Los ciudadanos no tienen derecho a recibir o poseer publicaciones de otros países, aunque los estancos de algunos hoteles para extranjeros y ciertas tiendas en divisas convertibles vendieron un número limitado de revistas y periódicos extranjeros. La disidente Marta Beatriz Roque informó sobre casos de personas que recibieron multas de hasta \$1,560 (aproximadamente 30,000 pesos) por la posesión ilegal de equipos para la transmisión de televisión por satélite; también estuvieron sujetos a confiscación aparatos de televisión y reproductores de DVD. El 1ero de junio, Raúl Castro revocó la ley que penalizaba la posesión de reproductores de DVD. El gobierno continuó interfiriendo las transmisiones de Radio y Televisión Martí.

Con frecuencia el gobierno obstruyó el recibo, por parte de los bibliotecarios independientes, de materiales provenientes del extranjero y confiscó materiales donados por diplomáticos de otros países. El gobierno prohibió a las misiones diplomáticas imprimir o distribuir publicaciones, incluyendo periódicos y resúmenes de noticias, salvo que dichas publicaciones se remitieran exclusivamente a las condiciones del país de origen de la misión y previa aprobación del gobierno cubano.

Libertad de acceso a la Internet

El gobierno controló casi todo el acceso a la Internet. Las autoridades revisaron y censuraron los correos electrónicos y prohibieron cualquier documento adjunto. Las autoridades también bloquearon el acceso a sitios en la red que consideraron objetables. Los ciudadanos sólo pudieron acceder a la Internet a través de instituciones aprobadas por el gobierno, salvo en los centros de Internet facilitados por pocas misiones diplomáticas. En el mes de agosto, las autoridades cortaron el acceso a la Internet en cuatro cibercafés estatales, incluyendo uno en el Ministerio de Comunicaciones. Los únicos ciudadanos con acceso directo a la Internet permitido fueron algunos funcionarios gubernamentales y algunos médicos, profesores y periodistas aprobados por el gobierno. El gobierno también restringió aún más el uso de la Internet en oficinas gubernamentales, circunscribiendo a la mayoría de los funcionarios a páginas de la red relacionadas con su trabajo. Se permitió a los extranjeros, no a los cubanos, comprar tarjetas de acceso a la Internet del proveedor nacional de telecomunicaciones y utilizar los centros de negocios de los hoteles, donde el acceso a la Internet cuesta \$10 (240 pesos) la hora. El gobierno declaró que el 8% de la población tuvo acceso a la Internet, pero estudios independientes concluyeron que sólo el 2% de la población lo hizo en realidad.

Una ley del año 2004 estipula que todos los centros públicos de Internet deben de estar registrados ante el gobierno y que dichos centros pueden estar sujetos a control y supervisión, sin previo aviso, por la agencia del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones. Aunque la ley no establece ninguna sanción específica por usar la Internet, es ilegal poseer una antena satelital que pueda facilitar el acceso sin censura a la Internet.

Libertad académica y eventos culturales

El gobierno restringió la libertad académica y continuó recalando la importancia de reforzar la ideología y disciplina revolucionarias. Los estudiantes están obligados participar en ceremonias patrióticas escolares y jurar seguir los principios de Fidel Castro y del PC. A los académicos se les prohibió reunirse con algunos diplomáticos sin previa aprobación del gobierno. A los académicos que se les permitió viajar al extranjero, se les advirtió que si su conducta era considerada políticamente desfavorable, ello podría tener un impacto negativo sobre sus familiares en el país.

El académico independiente Roberto de Miranda, presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, elaboró una lista de aproximadamente 300 educadores que, desde el 2004, habían perdido su trabajo debido a sus ideas políticas. Ninguno de ellos ha sido reinsertado ni ha podido encontrar un nuevo puesto de trabajo dentro del sistema educacional después de ello.

Las bibliotecas públicas controladas por el gobierno negaron el acceso a libros o a información a cualquier solicitante que no presentara una carta de permiso expedida por el gobierno.

Normalmente, la admisión en la Universidad se basó en la participación del estudiante en actividades estimuladas por el gobierno en los centros de enseñanza secundaria más que en el rendimiento académico del estudiante.

b. Libertad de reunión y asociación pacíficas

Aunque la constitución otorga derechos de reunión y asociación limitados, estos derechos están sujetos al requisito de que no deben “ser ejercidos contra la existencia y los objetivos del estado socialista”.

Libertad de reunión

La ley castiga cualquier reunión no autorizada de más de tres personas, incluyendo las de servicios religiosos privados en casas particulares, con sentencias de hasta tres meses de cárcel y el pago de una multa. Las autoridades aplicaron selectivamente esta prohibición y, a menudo, la utilizaron como pretexto para acosar y encarcelar defensores de derechos humanos.

Las autoridades nunca han aprobado ninguna reunión pública organizada por grupos de derechos humanos, deteniendo a menudo a los activistas para impedir su asistencia a reuniones, manifestaciones o ceremonias. Se produjeron reuniones y demostraciones sin aprobación, las cuales el gobierno frecuentemente desbarató, infiltró o trató de impedir. El 27 de septiembre, las autoridades detuvieron a decenas de manifestantes en diversos puntos, algunos a su llegada a la terminal de ómnibus, horas antes de que pudieran unirse a una protesta ante el Ministerio de Justicia. A veces, las autoridades incitaron a o utilizaron la violencia contra los manifestantes pacíficos. El 6 de diciembre, la policía golpeó y roció con spray pimienta al disidente Jorge Luís García Pérez (“Antúnez”) y a su esposa Iris Pérez, fuera de su casa, cuando éstos se preparaban para llevar a cabo una marcha pacífica.

Libertad de asociación

La ley prohíbe específicamente la existencia de grupos no reconocidos y el gobierno negó a los ciudadanos la libertad de asociación. Las autoridades no aprobaron nunca la existencia de grupos de derechos humanos; sin embargo, un número de asociaciones profesionales operaron como organizaciones no gubernamentales (ONG) sin reconocimiento legal. La constitución prohíbe cualquier organización política que no sea el PC.

Iglesias reconocidas, la organización humanitaria católica Caritas, la masonería y un número de organizaciones fraternales o profesionales fueron las únicas asociaciones a las que se les permitió funcionar fuera de la estructura formal, pero no de la influencia del estado, del PC y de sus organizaciones de masas. Las autoridades continuaron haciendo caso omiso de las solicitudes presentadas por nuevos grupos para que se les reconociera legalmente y, por lo tanto, expusieron a sus miembros a ser potencialmente instruidos de cargos por asociación ilícita.

c. Libertad de culto

Aunque la constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a practicar cualquier creencia religiosa dentro del respeto a la ley, el gobierno continuó restringiendo la libertad de culto. El gobierno exigió a las iglesias y a otros grupos religiosos su inscripción en el registro provincial de asociaciones adscripto al Ministerio de Justicia para obtener el reconocimiento oficial.

El gobierno continuó permitiendo la entrada al país de sacerdotes y trabajadores religiosos extranjeros, incluyendo a un obispo recién nombrado procedente de España, generalmente para sustituir a los sacerdotes y monjas extranjeros fallecidos o cuyos permisos de residencia habían expirado.

El 4 de diciembre, la policía penetró por la fuerza en una iglesia de la provincia Santiago de Cuba, rociando con spray pimienta y golpeando a 18 disidentes que esperaban por la misa. La policía arrestó a 7 disidentes, los cuales fueron liberados al día siguiente. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba condenó el incidente y, posteriormente, los funcionarios oficiales se disculparon ante la Iglesia. Funcionarios eclesiásticos aceptaron las disculpas y no se anticipó investigación posterior.

Aunque sin favorecer a ninguna iglesia o religión en particular, el gobierno se mostró más tolerante hacia las iglesias que mantuvieron una relación más estrecha con el Estado a través del Consejo Cubano de Iglesias (CCI).

Hubo numerosos informes de discriminación oficial hacia los Adventistas del Séptimo Día y los Testigos de Jehová, en lo que respecta al trabajo y la educación, debido al rechazo por parte de los miembros de estos grupos a trabajar en actividades escolares obligatorias los sábados y, en el caso de los Testigos de Jehová, a acatar el entrenamiento militar obligatorio.

Hubo informes de que personas que participaban en actividades religiosas fueran acosadas por ignorancia o prejuicios personales de un funcionario local. Testigos de Jehová de la provincia de Holguín informaron que en el mes de noviembre el gobierno prohibió a una compañía de autobuses alquilarles un ómnibus para transportar a algunos miles de creyentes a una serie de asambleas en el distrito.

El gobierno raramente permitió la construcción de nuevos templos, forzando a muchas congregaciones crecientes a solicitar permiso para reunirse en casas particulares. El CCI informó que ninguno de sus miembros recibió autorización gubernamental para construir nuevos locales de culto durante el período que cubre este informe. La mayoría de los grupos religiosos inscritos pudieron realizar sus servicios en casas particulares.

Una directiva gubernamental exige a las personas que operen una casa-templo inscribirla oficialmente. Para inscribir una casa-templo propia, el que la opere debe reunir una serie de requisitos: la casa-templo no debe realizar más de tres reuniones semanales; no debe encontrarse dentro de un radio de 1.2 millas respecto a otra casa-templo; no debe constituirse dentro de una residencia multifamiliar; y sólo podrá permanecer abierta de 5:00 a 10:00 PM en días laborables, y de 9:00 AM a 10:00 PM cualquier otro día. La inmensa mayoría de las casas-templo no estaban inscritas y, por tanto, fueron técnicamente consideradas como ilegales.

La educación fue laica, sin que se permitiera ninguna institución educacional religiosa; sin embargo, a la Iglesia Católica, las iglesias protestantes y las sinagogas judías se les permitió ofrecer clases de religión a sus miembros.

La literatura y materiales religiosos sólo pueden ser importados a través de grupos religiosos registrados y distribuidos sólo por grupos religiosos oficialmente reconocidos.

El gobierno permitió a cada diócesis solicitar tiempo para transmisiones de 15 minutos en Navidad, Semana Santa y el día de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Al Arzobispo de Santiago, Mons. Dionisio García Ibáñez, le fue permitido transmitir un mensaje de Navidad por primera vez, en el caso de la diócesis de Santiago, desde la visita del Papa en 1998.

Los grupos religiosos debieron presentar una solicitud ante los funcionarios locales del PC antes de celebrar procesiones u otros eventos fuera de los templos.

Abusos sociales y discriminación

No hubo informes acerca de violencia social, acoso o discriminación contra grupos religiosos. La comunidad judía contó con un total de entre 1,000 y 5,000 miembros. No hubo reportes sobre actos de antisemitismo.

Para una discusión más detallada, remítase al *Reporte Internacional sobre Libertad Religiosa 2007*

d. Libertad de circulación, personas internamente desplazadas.

Protección a refugiados y apátridas

La ley restringe estos derechos y el gobierno severamente restringió los viajes al exterior y la emigración. El gobierno ejerció una restricción profunda sobre los viajes locales y al exterior de los disidentes y limitó la emigración interna hacia La Habana. En las terminales de ómnibus, de trenes y en los aeropuertos se mantuvieron listas con nombres de disidentes y los que aparecieron en ellas no pudieron comprar pasajes.

Aunque la constitución permite que todos los ciudadanos viajen a cualquier parte dentro del país, la residencia está restringida severamente, lo que impide la libre circulación. Las comisiones locales de la vivienda y las autoridades de los gobiernos provinciales analizaron las solicitudes de permuta sobre la base del área del inmueble. Durante la espera por la autorización, que normalmente duró seis meses o más, el solicitante no pudo obtener ni raciones de comida ni un carné de identidad a nivel local. Cualquiera que se encuentre viviendo ilegalmente en un lugar puede ser multado y reenviado a su lugar de origen. Aunque la regulación tuvo efecto a nivel nacional, fue aplicada con más frecuencia en La Habana. La CCDHRN informó haber descubierto un vagón de ferrocarril, especialmente designado para ello, en el que semanalmente fueron devueltos a sus casas entre 50 y 100 jóvenes carentes de documentos de identidad.

El gobierno restringió tanto la emigración como los viajes temporales al extranjero, fundamentalmente a través de la exigencia del permiso de salida. Aunque el gobierno permitió la salida de la mayoría de las personas que calificaron para el status de inmigrante o refugiado en otros países, al menos 544 ciudadanos que recibieron documentos para viajar al extranjero, o a sus familiares, les fue negado el permiso de salida durante el año. Esta cifra sólo incluyó a las personas que informaron sobre sus dificultades a las misiones diplomáticas extranjeras. El grupo de personas a las que se les negó el permiso de salida incluyó a miembros del personal de la salud, hombres en edad militar, disidentes y ciudadanos con determinadas creencias políticas o religiosas.

Una política gubernamental no publicada niega el permiso de salida a los profesionales de la salud, hasta que éstos no hayan cumplido entre tres y cinco años de servicio en su profesión después de haber solicitado el permiso para viajar al extranjero.

Durante varios años, el gobierno negó el permiso de salida a los familiares de personas que emigraron ilegalmente (por ejemplo, marinos mercantes y atletas que desertaron cuando se encontraban fuera del país). Con frecuencia, el gobierno retuvo los permisos de salida para controlar a los disidentes. La médico disidente Dra. Hilda Molina permaneció esperando por el permiso de salida, como lo ha hecho durante 12 años. Además, a la anciana madre de la Dra. Molina no se le permitió solicitar dicho permiso.

El gobierno negó el permiso de salida a activistas de derechos humanos que portaban documentos válidos para viajar al extranjero. El gobierno continuó negándole al disidente Oswaldo Payá y a miembros de las Damas de Blanco, esposas de prisioneros políticos, el permiso para viajar al exterior para asistir a conferencias o recibir premios otorgados por grupos internacionales de derechos humanos.

El gobierno utilizó por igual el exilio interno y externo. La ley permite a las autoridades impedir el acceso de una persona a un área determinada, o limitarla a un área determinada, por un período de 1 a 10 años. En base a esta disposición, las autoridades pueden exiliar a cualquier persona cuya presencia en un determinado lugar sea considerada como “socialmente peligrosa”. Las autoridades amenazaron sistemáticamente a los disidentes que iban a emigrar, o a los miembros de su familia, con que si hablaban mal del gobierno en el extranjero, sus familiares pudieran perder su trabajo o serles denegación el permiso de salida. Los que trataron de emigrar legalmente también enfrentaron represalias, acoso e intimidación por parte del gobierno, incluyendo la expulsión del centro de estudios, el cambio involuntario de trabajo, la amenaza de arresto y la cesantía.

Los que desean emigrar deben pagar aproximadamente por los trámites del permiso de salida \$180 (4,500 pesos), \$66 (\$1,650 pesos) por el pasaporte y \$30 (\$750 pesos) por el impuesto de aeropuerto, lo que equivale aproximadamente al salario de 23 meses del ciudadano promedio. Los ciudadanos que solicitaron el permiso de salida hacia los EE.UU. tuvieron que enfrentar un recargo adicional de aproximadamente \$625 (15,000 pesos o el salario de 6 meses) para los adultos y \$444 (10,656 pesos) para los niños. Estas cuotas representaron una carga significativa, particularmente para los emigrantes que fueron cesanteados por “no ser confiables políticamente” y se vieron privados de recursos. A finales de año, algunos emigrantes potenciales no pudieron abandonar el país por no tener con qué pagar el permiso de salida. Rutinariamente, las autoridades desposeyeron a los emigrantes y a sus familiares de sus casas y de la mayoría de sus pertenencias, antes de permitirles abandonar el país. El gobierno también exigió el pago de fuertes multas por tentativas infructuosas de abandonar ilegalmente el país.

La ley dispone una sentencia de hasta 3 años de prisión o una multa de entre \$12 y \$40 (\$300 y \$1,000 pesos) por salidas no autorizadas del país en barco o balsa. El gobierno a veces también aplicó una ley sobre tráfico de personas a los emigrantes potenciales. La CCDHRN estimó que a fines de año, entre 300 y 500 ciudadanos estaban cumpliendo sentencia o esperando ser juzgados por ese tipo de cargos, que normalmente conllevan sentencias carcelarias de entre 15 y 20 años. Según los términos de los Acuerdos Migratorios entre Cuba y los EE.UU. de 1994, el gobierno se comprometió a no procesar ni tomar represalias contra los emigrantes que trataran de salir ilegalmente del país y fuesen posteriormente devueltos

desde aguas internacionales o de los EE.UU. o desde la base naval estadounidense de Guantánamo, si éstos no habían cometido otro delito. Sin embargo, en la práctica, los posibles emigrantes fueron objeto de acoso y discriminación como multas, expulsión de los centros de estudio, pérdida de empleo y encarcelamiento.

Por lo general, el gobierno se negó a aceptar a los ciudadanos nacionales devueltos desde territorio estadounidense más allá de los límites marítimos fijados en los Acuerdos Migratorios.

Protección a refugiados

Aunque el país no es miembro de la Convención de Naciones Unidas de 1951 relacionada con el status de los refugiados ni de su Protocolo de 1967, la constitución dispone el otorgamiento de asilo a las personas perseguidas por ideales o acciones que involucren un número de aspectos políticos específicos. Aunque el gobierno no cuenta con un mecanismo formal para tramitar el asilo a nacionales extranjeros, en la práctica brindó protección contra la devolución de personas a un país en el cual existen motivos para pensar que serían objeto de persecución, incluyendo a algunos prófugos de la justicia a los cuales define como refugiados por razones políticas.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y con otras organizaciones humanitarias, brindando asistencia a los refugiados y a los que buscaban asilo.

Sección 3. Respeto hacia los derechos políticos: el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno

En las elecciones de 2003 a la Asamblea Nacional, las cuales no fueron ni libres ni justas, el Partido Comunista (PC) obtuvo el 98% de los votos y la totalidad de los 609 escaños de dicha Asamblea.

En julio de 2006 y debido a un problema de salud que se mantuvo, el presidente Castro traspasó el poder provisionalmente a su hermano, el General Raúl Castro. Sin participación ciudadana alguna, las instituciones no democráticas existentes, incluyendo las fuerzas armadas, el PC y la ANPP, avalaron el traspaso.

Elecciones y participación política

Aunque la constitución establece la elección directa de integrantes a las asambleas municipales, provinciales y a la ANPP, los ciudadanos no tienen derecho a cambiar su gobierno, y el gobierno tomó represalias contra los que obraron por un cambio político por medios pacíficos. El 6 de septiembre, el disidente Oswaldo Payá entregó al el Consejo de Estado una reclamación para anular la ley electoral, por violar lo prescrito en la Constitución referente a elecciones libres y justas. El gobierno no le respondió.

Los candidatos a puestos electivos provinciales y nacionales deben ser aprobados previamente por organizaciones de masas como las femeninas y juveniles controladas por el gobierno. Por primera vez, hasta 8 candidatos pudieron aspirar a un escaño en las elecciones municipales del 21 de octubre. Anteriormente, cada municipio sólo podía nominar a un sólo candidato. En la práctica, un pequeño grupo de dirigentes, bajo la dirección del presidente,

seleccionó a los miembros de más alto nivel normativo del PC: el Buró Político y el Comité Central. Si bien no es considerado como un requisito formal, el ser miembro del PC fue, en la práctica, un requisito previo para obtener puestos oficiales de alto nivel y un ascenso profesional.

Hubo dos mujeres entre los 21 miembros del Buró Político y 17 entre los 126 del Comité Central. De los 29 miembros del Consejo de Estado, cinco fueron mujeres, ocupando también éstas 219 de los 608 escaños de la Asamblea Nacional.

Las personas de ascendencia africana ocuparon 4 puestos en el Buró Político. A raíz de las elecciones a la ANPP de 2003, el gobierno reportó una composición de un 67% de blancos, un 22% de negros y un 11% de mestizos.

Corrupción gubernamental y transparencia

La ley dispone sanciones penales por corrupción oficial; sin embargo, el gobierno no aplicó la ley con eficacia; y con frecuencia, funcionarios llevaron a cabo actividades de corrupción con impunidad.

De acuerdo a los indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial, la corrupción gubernamental constituyó un problema. La prensa oficial e independiente reportó incidentes de corrupción gubernamental. En ocasiones, funcionarios oficiales extorsionaron a residentes legales en el extranjero que venían al país a visitar a sus familiares. En ocasiones, funcionarios de la aduana confiscaron las pertenencias de esos visitantes y pidieron el pago de cuotas no autorizadas para que éstos pudieran pasar el despacho aduanal.

Los funcionarios públicos no están sujetos a ninguna ley especial para revelar información financiera. Tampoco los funcionarios públicos están obligados a acatar leyes específicas, fuera de aquellas que tengan que ver con la población en general en lo que respecta a revelar el monto de ingresos por concepto de impuestos y el sometimiento a la ley contra el “enriquecimiento ilícito”. Sin embargo, todos los funcionarios deben firmar un código de conducta ética que incluye no aceptar fondos provenientes de fuentes ilegales. A ninguna agencia gubernamental se le asignó particularmente la tarea de combatir la corrupción gubernamental.

La ley dispone el acceso público a la información gubernamental, pero las solicitudes de información fueron habitualmente rechazadas en la práctica, a menudo fundamentado en que el acceso no constituía un derecho. Muchos reos, así como sus abogados defensores, nunca recibieron una copia del certificado de sentencia, a la que tenían derecho por ley.

Sección 4. Actitud del gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos.

Violando sus propia legislación, el gobierno no reconoció a ninguno de los grupos nacionales de derechos humanos ni les permitió actuar legalmente. Varias organizaciones de derechos humanos continuaron funcionando al margen de la ley, incluyendo la CCDHRN, el Movimiento Cristiano de Liberación, la Asamblea para Promover la Sociedad Civil y la Fundación Lawton para los Derechos Humanos. El gobierno sometió a los defensores nacionales de los derechos humanos a la violencia, la intimidación intensa y el acoso, incluyendo las amenazas de muerte y desaparición.

Aunque empleó estas tácticas con menos frecuencia que en el pasado, el gobierno también organizó actos de repudio, en los cuales movilizó a militantes del PC y a otros para que realizaran una manifestación pública encaminada a intimidar y aislar a un miembro de una ONG de derechos humanos.

El gobierno también tomó medidas para impedir la circulación de activistas; en muchas ocasiones, la Seguridad del Estado, la policía y las turbas impidieron a miembros de las Damas de Blanco viajar a La Habana para participar en marchas.

El gobierno rechazó el monitoreo internacional de los derechos humanos, no reconoció el mandato del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también se negó a responder a las solicitudes de visita al país del representante personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El gobierno continuó negando a las organizaciones de derechos humanos y al Comité Internacional de la Cruz Roja, el acceso a presos y detenidos políticos. El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Alimentación, Sr. Jean Ziegler, visitó el país del 28 de octubre al 6 de noviembre.

Sección 5. Discriminación, abuso social y tráfico de personas

La constitución prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, discapacidad física o situación social; sin embargo, la discriminación racial fue frecuente.

Mujeres

La ley penaliza la violación sexual, incluyendo la marital, y la víctima tiene derecho a informar la misma a la policía. Raramente la policía remitió estos casos a los tribunales si la víctima no sufrió lesiones físicas visibles.

Aunque el gobierno no publicó estadísticas sobre arrestos, procesos judiciales o condenas por violación sexual durante el año, la ley contempla penas de 4 a 10 años de prisión. Si en el hecho están involucrados dos o más violadores, o si el violador ha sido condenado anteriormente por el mismo delito, la sentencia puede llegar a 15 años. Si la víctima es menor de 12 años de edad, o si el acto deriva en lesiones o perjuicios graves, se podría aplicar la pena capital. El gobierno hizo cumplir la ley.

La ley prohíbe incurrir en amenazas y lesiones, incluyendo las asociadas a la violencia doméstica. La ley dispone las mismas penas para la violencia doméstica que para los casos de asalto. Estas pueden oscilar entre multas hasta sentencias carcelarias de duración variable, según la severidad del delito.

Defensores de los derechos humanos informaron que la violencia hacia las mujeres constituyó un problema y que, a menudo, la policía no intervino en los casos de violencia doméstica. La prensa rara vez informó sobre hechos violentos y el gobierno tampoco publicó datos sobre la incidencia de la violencia doméstica. Sin embargo, la CCDHRN y organizaciones tales como el Centro de Estudios y Capacitación de la Mujer “Rosa Berre” y la Delegación Cubana de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), informaron que la violencia doméstica constituyó un grave problema y que no hubo programas para proteger a las víctimas.

Para concientizar sobre la violencia doméstica, el gobierno llevó a cabo una campaña mediática a lo largo del año. Sin embargo, los jueces se mostraron extremadamente reacios a emitir una orden de restricción en los casos de disputas domésticas. La CCDHRN consideró que muchas mujeres no reportaron los casos de violencia doméstica por temor a que la denuncia desencadenara otro ataque.

La prostitución es considerada legal para las personas mayores de 17 años, pero el proxenetismo y las actividades económicas que favorezcan la prostitución, incluyendo el alquiler de habitaciones, son ilegales. Un gran número de turistas extranjeros visitaron el país específicamente para frecuentar prostitutas y el turismo sexual constituyó un problema. Algunos oficiales de la policía fueron sospechosos de dar protección a individuos involucrados en la prostitución. La periodista Lamasiel Gutiérrez puso al descubierto una amplia red de personas en el municipio Isla de la Juventud, dedicadas a reclutar estudiantes entre 14 y 20 años de edad para que figuraran en materiales explícitamente sexuales, que luego aparecerían en la Internet o serían vendidos en DVD.

La ley dispone penas por acoso sexual, con sentencias posibles de 3 meses a 5 años de prisión. Durante el año, el gobierno no publicó estadísticas sobre arrestos, procesamiento judicial o condenas por delitos relacionados con el acoso sexual. Según la CCDHRN, la ley fue aplicada con mayor frecuencia en casos de supervisores masculinos que “abusaron de poder” contra sus subordinadas femeninas.

La ley dispone que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y responsabilidades respecto al matrimonio, el divorcio, la crianza de los hijos, el sostén del hogar, y el seguir una carrera. La ley da a las madres trabajadoras el acceso preferencial a bienes y servicios. La ley estipula el pago acorde al trabajo y las mujeres recibieron generalmente un pago comparable con el recibido por los hombres por trabajo similar.

Infancia

La ley dispone que todos los niños tengan los mismos derechos y los padres el deber de asegurar su protección. La enseñanza pública hasta el nivel universitario fue gratuita, pero la promoción dentro del sistema educacional se supeditó a la participación en actividades políticas. La ley exige la asistencia a la escuela hasta el 9no grado, que fue el nivel más alto alcanzado por la mayoría de los niños. El gobierno informó que el 97% de los niños en edad de primaria fueron matriculados en el curso escolar 2006-2007, y que la asistencia de los de secundaria fue de 92%. Todos los estudiantes primaria y secundaria recibieron adoctrinamiento ideológico obligatorio.

El gobierno mantuvo un expediente de cada niño, desde el preescolar hasta el nivel medio superior, el cual incluyó un record de su participación en actividades políticas, como las marchas obligatorias. La participación plena en actividades políticas, como la membresía en la Unión de Pioneros de Cuba, una organización juvenil reglamentada utilizada por el gobierno para el adoctrinamiento político, fue esencial para la promoción dentro del sistema educacional.

Los niños y las niñas tienen igual acceso al sistema nacional de salud, el cual afirma cubrir a todos los ciudadanos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia informó sobre cifras elevadas de vacunación contra enfermedades infantiles. Los niños hasta la edad de 7 años recibieron raciones adicionales de alimentos a través de la libreta de abastecimiento.

No hubo incidencias sociales de abuso infantil.

La prostitución infantil constituyó un problema, con muchachas jóvenes involucradas en la prostitución para ayudar a su propia manutención y a la de sus familias. Aunque la prostitución de menores fue ampliamente evidente, no se dispuso de estadísticas confiables relacionadas con su magnitud. Ya a los 14 años los niños pueden contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres, mientras que la ley dispone de 2 a 5 años de prisión para cualquiera que “induzca a menores de menos de 16 años a practicar el homosexualismo o la prostitución”. Los menores desempeñaron un papel clave en la pujante trata sexual del país, alimentada por la visita de miles de turistas extranjeros. Existen pruebas anecdóticas de que, en casos individuales, empleados de hoteles estatales, empleados de las agencias de viajes, chóferes de taxis, empleados de bares y restaurantes, y personal de orden público, fueron cómplices de la explotación sexual de niños con fines comerciales.

Aunque a veces la policía aplicó la ley en casos de prostitución infantil, cabarets y discotecas la facilitaron a los turistas sexuales. Los ingresos provenientes del turismo sexual constituyeron una fuente directa e importante de divisas para el gobierno. Durante el año, no hubo informes de casos de abuso involucrando niños recluidos en instituciones; tampoco el gobierno publicó información sobre medidas oficiales para prevenir o castigar tales abusos.

Trata de personas

La ley prohíbe la mayoría de las formas de trata humana. Sin embargo, hubo informes acerca de la trata de mujeres desde el país. Hubo trata de menores para ejercer la prostitución y para el trabajo forzoso dentro del país.

La naturaleza y el alcance de la trata en el país fue difícil de medir debido al carácter cerrado del gobierno y la carencia de informes de ONG. Sin embargo, algunos ciudadanos que lograron emigrar en lanchas rápidas, fueron forzados a trabajar como marineros de cubierta en viajes de contrabando, para poder sufragar el costo de su viaje.

Las víctimas de la trata provinieron de todo el país y muchas trabajaron en ciudades de importancia, así como en áreas de instalaciones turísticas. Algunos datos anecdóticos arrojaron que las víctimas provenían, por lo general, de familias de bajos recursos, pero otras fuentes informaron sobre la ocurrencia del fenómeno en todos los niveles de la sociedad, incluyendo familias de funcionarios del gobierno. En algunos casos, las familias estimularon a las víctimas a que se prostituyeran por el ingreso adicional que dichas actividades podían aportar. En muchos casos, los traficantes tentaron a las víctimas de las áreas rurales con pasajes de autobús y promesas de trabajos bien remunerados en áreas urbanas.

La ley castiga la promoción u organización de la entrada de personas al país, o la salida de éste con fines de prostitución; los infractores estuvieron sujetos a condenas de 20 a 30 años de cárcel. El código penal dispone penas de 4 a 20 años de prisión por la trata con fines vinculados con la prostitución o el comercio sexual, y de 7 a 15 años por el tráfico internacional de menores. No hubo disposiciones legales conocidas contra el tráfico de adultos con el fin de someterlos a trabajo forzoso. Las penas civiles son denominadas “responsabilidades” y un delito como dañar una embarcación de propiedad estatal puede incluir indemnizaciones u otras reparaciones. La CCHRN declaró que en casos de trata

interna, en vez de presentar un cargo por trata, el gobierno puede encausar por “proxenetismo”.

Los ministerios de Justicia y de Educación, la PNR y los gobiernos locales tuvieron la tarea de combatir las distintas facetas de la trata humana y la prostitución de menores; ninguna entidad en particular gozó de autonomía para lidiar con estas situaciones. La policía fue la responsable de investigar y arrestar a los traficantes; el Ministerio de Justicia de procesar judicialmente y encarcelarlos; y el Ministerio de Educación de rehabilitar a las prostitutas.

No hubo estadísticas confiables acerca de la cantidad de tratantes procesados o condenados durante el año. La CCDHRN estima que entre 500 y 1,000 ciudadanos estaban cumpliendo sentencias por “proxenetismo”, pero no quedó claro si estos individuos realmente traficaron con personas o simplemente facilitaron trabajo a personas que estaban dispuestas a hacerlo. Todos los procesados o condenados habían llegado al país provenientes de los EE.UU., de México, o de otros países como las Bahamas, aparentemente con el fin de sacar a personas de Cuba. No hubo información disponible acerca de ayuda prestada por el gobierno en investigaciones internacionales sobre trata o extradición de tratantes.

Hubo pruebas anecdóticas de que trabajadores de hoteles estatales, personal de orden público y otros involucrados en la industria turística fueron cómplices de la explotación sexual comercial de niños que tiene que ver con el comercio sexual destinado al turismo. Durante el año, no hubo investigaciones ni procesamientos judiciales conocidos contra funcionarios públicos por complicidad en este tipo de tráfico.

Aunque la prostitución no es un crimen per se, las personas involucradas en la prostitución, incluidos las posibles víctimas de la trata y los niños, a menudo fueron tratados como criminales, detenidos y llevados a centros de rehabilitación que no contaban con personal entrenado o equipado adecuadamente para cuidar de las víctimas de la trata.

Ninguno de los grupos de la sociedad civil en el país brindó asistencia en calidad oficial a las víctimas de la trata. En materia de trata, el gobierno no estableció ninguna coordinación con las organizaciones internacionales o con las ONG que operan en el país. No se conocen programas gubernamentales para prevenir la trata.

Personas discapacitadas

No se conoció ley que prohibiese la discriminación oficial de personas discapacitadas para trabajar, estudiar, tener acceso a los servicios de salud o a otros servicios provistos por el estado. Sin embargo, una resolución del Ministerio del Trabajo brinda a las personas discapacitadas el derecho a igual oportunidades de empleo y a un pago acorde al trabajo realizado. No existió discriminación oficial hacia las personas discapacitadas. No existen leyes que obliguen a facilitar el acceso de las personas discapacitadas a los inmuebles y, en la práctica, los edificios y los medios de transporte rara vez facilitaron el acceso de personas con discapacidades.

La sección para la educación especial del Ministerio de Educación fue la encargada de la educación y capacitación de los niños con discapacidades. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encargó del programa de empleos para los minusválidos.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

Aunque hubo muchos oficiales de la policía y personal enrolado en el ejército pertenecientes a la raza negra, los afrocubanos a menudo sufrieron la discriminación racial. Los afrocubanos se quejaron de haber sido objeto de paradas frecuentes y desproporcionadas para pedirles sus documentos de identidad y declararon que a menudo les gritaron insultos y epítetos de contenido racial en público. Los afrocubanos estuvieron desproporcionadamente representados en barrios de las peores condiciones habitacionales. Sólo 3% del cuerpo de oficiales de las fuerzas armadas estuvo compuesto por afrocubanos, aunque éstos estuvieron representados de forma importante en las tropas. Pocos de los niños que asistieron a las escuelas élites para los miembros de alto nivel del PC eran de ascendencia africana. Los no blancos, que conformaron aproximadamente el 50% o más de la población del país, constituyeron también las $\frac{3}{4}$ partes de su población penal.

Otros abusos y discriminación sociales

La discriminación social hacia los homosexuales persistió; en ocasiones, la policía condujo redadas en áreas donde se congregaron homosexuales, particularmente a lo largo del malecón habanero.

El gobierno continuó manteniendo en sanatorios de tratamiento y terapia a algunas personas diagnosticadas como positivas al VIH, antes de reintegrarlas condicionalmente a la comunidad. Incluso después de su alta, algunas personas con VIH/SIDA dijeron que el gobierno monitoreó con otras personas sus movimientos con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad. Algunas personas con VIH/SIDA fueron discriminados laboralmente o fueron rechazados por sus familiares. El gobierno operó cuatro establecimientos penitenciarios exclusivos para personas que sufrían de VIH/SIDA; algunos reos estaban cumpliendo sentencias por “propagar epidemia”. Una persona con VIH/SIDA, que fue excarcelada en noviembre de una prisión de este tipo en La Habana, informó que las condiciones carcelarias eran pobres, que la atención médica era irregular y que las drogas retrovirales, así como otras formas de tratamiento del VIH, no eran suministrados con regularidad.

Sección 6. Derechos del trabajador

a. El derecho de asociación

La ley no permite que los trabajadores funden o se afilien a sindicatos de su elección. Mas bien, el estado estableció sindicatos oficiales y no permitió la competencia de sindicatos independientes. Los sindicatos oficiales cumplieron una función movilizadora y no actuaron como tales, no promovieron los derechos del trabajador o no protegieron el derecho a huelga. Dichas organizaciones estuvieron bajo control del estado y del PC, los que también administraron las empresas para las cuales trabajaron los obreros. Como todos los sindicatos legales fueron entidades gubernamentales, no existió, por definición, la discriminación antisindical.

La única confederación de trabajadores legal fue la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), cuyos dirigentes fueron escogidos por el PC. La principal responsabilidad de la CTC fue asegurar que se cumplieran las metas productivas trazadas por el gobierno. Virtualmente, todos los trabajadores fueron obligados a pertenecer a la CTC, y se limitó las promociones a

los militantes del PC que tomaron parte en marchas obligatorias, humillaciones públicas contra los disidentes y otras actividades organizadas por el Estado.

Muchos trabajadores perdieron sus empleos debido a sus convicciones políticas, incluyendo el negarse a afiliarse al sindicato oficial.

Algunos pequeños sindicatos independientes funcionaron sin reconocimiento legal, muy en particular el Sindicato de Chóferes de Bicitaxis. Estas organizaciones también estuvieron sujetas a infiltraciones por parte de agentes del gobierno y no pudieron representar efectivamente a los trabajadores o trabajar en su favor.

El gobierno continuó encarcelando a los activistas sindicales independientes, incluyendo a Pedro Pablo Álvarez Pedrosa, presidente del Consejo Unitario de Trabajadores, quien fue condenado a 25 años de prisión.

Seis de los siete dirigentes sindicales independientes encarcelados en 2003 permanecieron en prisión, cumpliendo condenas de 12 a 25 años.

b. El derecho a organizar y suscribir convenios colectivos

Aunque está dispuesto en la ley, en la práctica no se suscribieron convenios colectivos. El Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social fijó sueldos y salarios para el sector estatal, que fue casi plenamente el único empleador en el país. La ley no permite huelgas y no se supo de ninguna a lo largo del año.

No existen leyes especiales ni exenciones de las leyes laborales regulares en las tres zonas para procesamiento de exportaciones.

La ley niega a todos los trabajadores, salvo a los que gozan de un permiso especial del gobierno, el derecho a suscribir contratos directamente con las compañías extranjeras que han invertido en el país. Aunque algunas firmas negociaron exenciones, el gobierno exigió a los inversores extranjeros y a las misiones diplomáticas contratar trabajadores a través de agencias de empleo estatales, las que son muy bien pagadas en divisas y que a su vez pagan a los trabajadores muy bajos salarios en pesos. Los trabajadores subcontratados por estas agencias deben reunir algunas condiciones políticas. Las agencias de empleo consultan previamente al PC, la CTC y la UJC para asegurarse de que los trabajadores escogidos “merecen” trabajar en una empresa mixta.

c. Prohibición del trabajo forzado u obligatorio

La ley no prohíbe el trabajo forzado u obligatorio de los adultos. El gobierno mantuvo centros correccionales para personas condenadas por delitos como la peligrosidad. Los presos encarcelados en dichos centros fueron forzados a trabajar en granjas o en obras de la construcción, en la agricultura o en la metalurgia. A menudo, las autoridades también encarcelaron a personas que se negaron a trabajar en los lugares a donde fueron enviadas.

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio de niños; sin embargo, este tipo de prácticas se produjo.

En el mes de mayo, un juez aplazó el juicio de tres ciudadanos residentes en el exterior, los cuales habían presentado una denuncia ante una corte extranjera en el año 2006 alegando haber sido parte de los cientos de cubanos forzados por el gobierno a trabajar en un astillero en Curazao. Los hombres afirmaron que los guardias cubanos los amenazaban con enviarlos a prisión si se negaban a trabajar 112 horas semanales. A fines de año, el caso todavía estaba pendiente.

d. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima de empleo

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio de niños y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue el encargado de hacerlo cumplir. Sin embargo, el gobierno exigió que los niños trabajaran en ciertas circunstancias.

Los estudiantes becados en escuelas en el campo debieron realizar trabajos manuales diarios durante varias horas. Los estudiantes de secundaria debieron dedicar hasta 15 días de sus vacaciones de verano para llevar a cabo una serie de tareas, desde el trabajo en granjas hasta la realización de planes de limpieza urbana, por lo que se les pagó un pequeño salario. Los estudiantes de los institutos de nivel medio superior en el campo (escuelas técnicas e institutos preuniversitarios y agronómicos) debieron dedicar entre 30 y 45 días al año a la realización de trabajos principalmente agrícolas. El negarse a hacer el trabajo agrícola pudiera resultar en la expulsión del alumno de su centro de estudios.

La edad laboral mínima es 17 años, pero el código laboral permite dar empleo a niños de 15 y 16 años como entrenamiento o para cubrir escasez de mano de obra. El código laboral no permite trabajar a los adolescentes más de 7 horas diarias o 40 horas semanales, ni tampoco hacerlo en días festivos. Los niños en edades entre 13 y 18 años no pueden trabajar en labores específicas que pudieran resultar peligrosas, como la minería o el trabajo nocturno.

No se tuvo conocimiento de programas gubernamentales para prevenir el trabajo infantil o para retirar a los niños de tal trabajo.

e. Condiciones de trabajo aceptables

El salario mínimo, establecido por el Ministerio de Trabajo, varía según la actividad laboral. Como promedio, el salario mínimo mensual fue de aproximadamente \$9 (225 pesos). El gobierno adicionó al salario mínimo la educación gratuita, la atención médica subsidiada (el salario diario es reducido en un 40% después del tercer día de hospitalización), la vivienda y algunos alimentos subsidiados. Inclusive con estos subsidios, el gobierno mismo reconoció que el salario mínimo no brindó un estándar de vida decoroso al obrero y su familia.

La ley exige que los inversionistas extranjeros contraten a sus trabajadores a través de agencias de empleo gubernamentales. Las compañías extranjeras pagan al gobierno tanto como \$600 a \$800 mensuales por trabajador. Sin embargo, como el gobierno paga salarios en pesos no convertibles, los trabajadores acaban recibiendo el 3% del dinero que el empleador extranjero pagó por ellos.

La semana estándar de trabajo es de 44 horas, con semanas laborales más cortas en los casos de trabajos peligrosos como la minería. La ley dispone un período de 24 horas semanales de descanso. Estos estándares se hicieron valer efectivamente. La ley no prevé paga superior por concepto de horas extras ni prohíbe el trabajo obligatorio en horas extras. El negarse a

trabajar horas extras puede conducir a una nota en el expediente laboral del trabajador, que puede hacer peligrar posteriores solicitudes de vacaciones.

Las leyes que disponen controles de protección e higiene del fueron inadecuadas y el gobierno careció de mecanismos para hacerlas cumplir. La ley dispone que si un trabajador considera que su vida corre peligro debido a condiciones riesgosas, tiene derecho a negarse a trabajar en ese puesto o a no realizar actividades específicas hasta que dichos riesgos sean eliminados; sin embargo, el trabajador está obligado a trabajar temporalmente en cualquier otro puesto que se le asigne, con el salario previsto por la ley.